

“El desarrollo urbano de México ante el Primer Informe de Gobierno de Salinas. Perspectivas para las ciudades”

Carlos Bustamante Lemus*

El pasado primero de noviembre de 1989, el presidente de México, Carlos Salinas compareció ante el Congreso de la Unión para presentar el Primer Informe de Gobierno, a once meses de haber asumido su cargo. Millones de mexicanos estuvieron atentos, ese mismo día o el siguiente para escuchar o leer con expectación y tal vez hasta con esperanza, algunas buenas noticias para el futuro inmediato, sobre todo después de que por lo menos en los últimos siete Informes Presidenciales, solo malas noticias y desesperanza –fuera de los pronunciamientos demagógicos y triunfalistas– han predominado en la escena económico-político-social de nuestro país, debido a los efectos de la crisis económica que padecemos desde hace casi dos décadas.

A través de un breve análisis de las cifras del Banco de México, se deduce que la actividad productiva en el periodo de 1982-1988, sufrió una de las caídas más espectaculares en la historia económica del país, lo cual se ha expresado entre otras cosas, en un notable deterioro del nivel de bienestar de la mayor parte de la población. El Producto Interno Bruto (PIB) registró una tasa promedio de crecimiento negativo de alrededor del 1%, mientras que en los dos sexenios precedentes creció en una tasa promedio del 6%.

Aún cuando la tasa de crecimiento demográfico disminuyó, el producto por habitante cayó en cerca del 17%.

Esta caída en el crecimiento de la economía en el periodo mencionado se debió básicamente a que la política económica del Gobierno Federal se orientó a contener el proceso inflacionario, lo cual frenó la inversión y por consiguiente la actividad económica. Los sectores más afectados fueron el agropecuario e industrial.

La caída de estos sectores, sobre todo el industrial, ha repercutido en la disminución del empleo en alrededor del 16% durante el último sexenio. El mismo proceso de urbanización acelerada que mostró el país en los años del auge, se recrudeció con la crisis al acelerarse el éxodo de los migrantes del campo a

las ciudades y al restringirse el gasto público para la atención de los servicios urbanos a la población y de los programas de infraestructura urbana y vivienda popular.

El comportamiento del Sector Servicios es el que refleja la crisis en toda la economía mexicana, es decir una contracción de la oferta y expulsión de mano de obra de los sectores productivos, ante un crecimiento de la demanda de empleos y bienes de consumo, los cuales se hacen inaccesibles debido al elevado precio y al bajo poder adquisitivo de la población.

En los últimos siete años el consumo *per cápita* nacional cayó en 17%, dado que el deterioro salarial en ese periodo colocó a la fuerza de trabajo mexicana de la industria manufacturera, como la más barata en el mercado mundial de mano de obra. Como ejemplo ilustrativo señalaremos lo siguiente:

Salario promedio por hora de un obrero mexicano en la industria manufacturera, comparado con otros países del mundo en 1988. (U.S.A. Dlls.)

Alemania Federal	16.9
Estados Unidos	13.4
Francia	12.4
Japón	11.1
España	7.8
Singapur	2.4
Hong Kong	2.1
Corea del Sur	1.8
México	1.6

Fuente: “Statistics of labour”, 1989. ONU.

* Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.



Esta visión global de los efectos de la crisis económica en México se ve reflejada a manera de síntesis en las ciudades del país, pero sobre todo en la gran Zona Metropolitana de la Ciudad de México que es la que aporta alrededor del 45% del PIB. Se han agravado los problemas sociales de desempleo, escasez de vivienda popular, deterioro del equipamiento urbano (drenaje, alumbrado público, agua potable, parques y jardines, limpia, escuelas, etc.), hundimiento del suelo, congestión del tráfico vehicular, contaminación del aire, proliferación del comercio ambulante y aumento de la delincuencia.

Los ánimos exacerbados de la población se vieron expresados políticamente en el proceso electoral de julio de 1988, en donde el Partido Revolucionario Institucional no sólo no mostró su carácter arrollador en la victoria, sino para muchos resultó dudoso su triunfo.

Con esa respuesta política de la población y los sectores comerciantes y empresarial el presidente Carlos Salinas de Gor-

tari inicia la gestión administrativa de su gobierno, ordenando a las nuevas autoridades Federales, Estatales y Locales, emprender una acción de consulta sistemática a la ciudadanía a través de las diversas organizaciones sociales, vecinales, educativas profesionales, gremiales y corporativas, con el fin de comprender más las necesidades, evaluarlas y poder concertar políticamente acciones para su atención.

A partir de ello, han cobrado más relevancia en la Ciudad de México, los organismos formales de representación ciudadana y vecinal como la Primera Asamblea de Representantes del D.F., y el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, integrado este último por los presidentes de colonias de las diversas delegaciones administrativo-políticas en las que está organizado el D.F., a través de los cuales se expresan las múltiples demandas de los habitantes¹ y a la vez se convierten en un factor de fuerza política y social para orientar algunos de los recursos con los que el Gobierno concreta su política urbana.

Otros elementos formales de agrupación organizadas y con respaldo económico-político son las de los comerciantes ambulantes, taxistas, transportistas y algunas otras agrupaciones gremiales las cuales han aprovechado perfectamente la coyuntura socioeconómica del país y la incapacidad del gobierno para generar empleos y proporcionar servicios a la población, para asentarse anárquicamente en las zonas urbanas de las grandes y medianas ciudades provocando una serie de desequilibrios socioeconómicos entre los sectores de la población y en la imagen urbana de ellos.

Los grandes objetivos del gobierno del presidente Salinas de Gortari no varían en casi nada a lo establecido en los últimos años de la administración precedente: en el plano económico, detener la carrera inflacionaria, recuperar el crecimiento con estabilidad de precios y estimular la apertura hacia el exterior; en el político, ampliar la vida democrática y fortalecer la reforma política; y en el social, elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos.

Estos objetivos quedaron una vez más plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (PND), que el Presidente de la República presentó a la Nación el pasado 31 de mayo.

El Plan Nacional de Desarrollo y la cuestión urbana

En el PND, se dice, que se favorecerá la búsqueda de un reordenamiento territorial y la desconcentración de las actividades económicas, impulsando la calidad de los servicios urbanos y la capacidad municipal para fortalecer su propio desarrollo. Plan-tea también la ampliación de las disponibilidades y el acceso a vivienda y servicios de infraestructura urbana, así como también la protección y restauración del medio ambiente.

Se subraya que el impulso al desarrollo regional y urbano puede ser posible a través de una estrategia de descentralización



de decisiones; de la actividad económica y de desarrollo urbano y municipal, que apoye y sea apoyado por el esfuerzo de todos los sectores sociales en cada una de las regiones y ciudades del país.

Como dichas estrategias sólo pueden ser ejecutadas a través del gasto público y este sistemáticamente se viene restringiendo, entonces se han venido impulsando los proyectos de coinversión pública, social, privada. El Gobierno Federal, los Estatales y Locales repetidamente han argumentado que los recursos para atender las necesidades de las ciudades en crecimiento son escasos y que los costos para proveer de la infraestructura y los servicios públicos a la población urbana son cada vez mayores. No obstante los presupuestos de las grandes ciudades continúan incrementándose sin que se observe un cambio en la tendencia de crecimiento anárquico de alguna de esas ciudades, ni tampoco un tratamiento de fondo a los problemas del deterioro del medio ambiente y de su imagen urbana.

La descentralización avanza muy lentamente y lo poco que se observa en materia de desconcentración territorial se refiere principalmente al capital privado transnacional, en el auge que ha tenido el asentamiento de empresas maquiladoras en las ciudades fronterizas y de tamaño medio del Norte del país; además de los complejos turísticos y de algunas industrias manufactureras de exportación que desde 1985-1986 venían mostrando recuperación gracias a la apertura comercial.

Aún en esas ciudades medias en crecimiento acelerado, en donde el capital se enfoca prioritariamente, los desequilibrios urbanos se manifiestan, y tal vez hasta con más nitidez. No ha habido un retorno de los ingresos generados hacia la atención de las ciudades y el campo. Los excedentes se continúan destinando prioritariamente a cubrir el servicio de la deuda y se sigue sacrificando a la población comprimiendo sus ingresos familiares a la sombra del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE). Las cifras de diversos analistas oficiales y privados muestran que 17 millones de habitantes se encuentran en condiciones de pobreza extrema y 41 millones en situación bastante crítica de pobreza; las migraciones del campo a las ciudades continúan dándose por oleadas y las ciudades (independientemente de su tamaño) siguen creciendo caóticamente; la atención

¹ Aunque este tipo de organizaciones formales no se extiende a los municipios conurbados de los Estados de México e Hidalgo, en la mayor parte de ellos existen agrupaciones de residentes o colonos que desarrollan crecientemente funciones de gestoría y presión social a las autoridades locales para la atención de sus demandas.

de los Gobiernos Locales a la población se centra en pequeñas obras de remozamiento, algunas reparaciones de lo existente desde hace 50 años o más, en actividades sociales o culturales que mitigan momentáneamente la inconformidad social.

Es evidente por lo tanto, que si mantenemos esa tendencia, al inicio del siglo XXI tendremos ciudades el doble de pobladas que las actuales; páramos en las zonas agrícolas temporales; concentración en la periferia de la Ciudad de México, en las ciudades fronterizas y otras ciudades grandes y medianas con problemas de abastecimiento de agua y restricciones para su drenaje.

Aunque el Primer Informe de Gobierno de Salinas se refiere muy poco al ordenamiento territorial o al desarrollo urbano del país en su conjunto, debe reconocerse que algunos esfuerzos se han centrado en la atención de la ciudad de México:

“La capital de la República es la ciudad de todos los mexicanos por ello la requieren todos los que la han enriquecido con su presencia. La dimensión de sus problemas, necesidades y conflictos podría cimbrar a cualquiera. Los riesgos que corre los conocemos, pero estamos decididos a hacer frente a los problemas de los que depende su viabilidad y a buscar formas más humanas de relación entre sus habitantes”.²

Se está combatiendo al parecer con mayor fuerza la delincuencia; se intenta rescatar el uso racional del agua con un nuevo reglamento próximo a entrar en vigor; la protección al medio ambiente se ha incorporado como una prioridad nacional y se está controlando a las fuentes móviles contaminantes (vehículos automotores), se ha modificado la gasolina, se reglamenta sobre el tránsito, sobre servicio de limpia y la basura; empieza a

concertarse el control de las industrias pequeñas contaminantes; el rescate ecológico de Xochimilco y la protección del suelo en el Ajusco y otras zonas semirurales de la capital.

En materia de atención social se destacan el Programa Nacional de Solidaridad, que no es sino una nueva versión del programa COPLAMAR de López Portillo y De la Madrid y de la inversión superior a los cinco billones de pesos para programas de vivienda a crédito, aunque en esto último cabe señalar que la gran parte de los programas de vivienda de 1988 todavía no se concluyen a la fecha.

Por otra parte, lo que el Informe no expresa es el consentimiento para fomentar el comercio ambulante y la informalidad de tantas actividades comerciales y de servicios que se apropian y consumen agua, combustible, energía eléctrica, espacio urbano colectivo y no generan ningún ingreso registrado al erario público pero sí a los líderes reconocidos y a los funcionarios “responsables” de su control.

No soslayamos el hecho de que un año de Gobierno es demasiado poco para apreciar resultados en problemas tan complejos como los del desarrollo urbano, los que son sólo una manifestación del desarrollo económico de la Nación en su conjunto. La miseria entre la población continúa agudizándose y más todavía con el establecimiento del nuevo tope al incremento de los salarios de los trabajadores, al haberse refrendado el PECE, mientras que al mismo tiempo se anuncian para empezar enero de 1990 aumentos en la carga tributaria (nueva reforma fiscal) y en las tarifas de los servicios públicos urbanos.

La pobreza de los habitantes y la administración de las ciudades sin objetivos precisos sobre el modelo urbano que queremos para el país es lo que está definiendo el perfil de las ciudades mexicanas: ya no nos asombrará la imagen lejana de Calcuta, Shanghai, Hong Kong, Nueva Delhi, etc., porque las vamos a tener con nosotros. Ojalá nos equivoquemos.

² Salinas de Gortari, *Primer Informe de Gobierno*, 1989.

